

AMÉRICA LATINA: UNA LIBERACIÓN POR COMPLETAR

Nils Castro

Como sabemos, en el último decenio varios países latinoamericanos han tenido alguna forma y grado de desplazamiento político a la izquierda. Esto ha ocupado la atención de muchos analistas y hoy disponemos de una importante cantidad de explicaciones que, pese a la diversidad de métodos y posiciones, coinciden en sus principales señalamientos sobre las causas y formas de ese fenómeno. Sin embargo, todavía hay pocas previsiones concretas sobre cuánto más esta tendencia se podrá extender y profundizar o, en caso de revertirse, lo que pudiera sobrevenir en su remplazo. Esto reabre en cierta perspectiva un tema clásico: el de la dialéctica entre reforma y revolución o, más precisamente, el de si estamos —o cuándo pudiéramos estar— ante unas condiciones que efectivamente demandan replantearlo.

En general, se recuerda cómo, tras el brutal ciclo de las dictaduras, el reflujó de las rebeliones guerrilleras y la reinstauración de las democracias civiles, sobrevino la ofensiva neoconservadora y con ella la imposición de los “reajustes estructurales” resumidos en el denominado Consenso de Washington. Acontecimientos que, en el ámbito externo, coincidieron con el cambio de estrategia en China, el colapso de la URSS y el “campo socialista”, así como los efectos que por varios años esos acontecimientos infligieron a las certidumbres, el prestigio y la convocatoria de las izquierdas.

El pasado ha muerto, pero...

En ese contexto, nuestros pueblos —azotados por las consecuencias de la deuda externa, las amenazas de la hiperinflación, el temor al regreso de los militares y la escasez de alternativas ideológicas viables— no obtuvieron las democracias que hubieran deseado, sino aquellas que les fueron concedidas en las transiciones pactadas entre los generales, los partidos tradicionales, la política norteamericana de la época y las autoridades financieras internacionales. Es decir, una modalidad de democracia restringida que no satisfizo muchas de las principales expectativas populares, pero restableció cierta parte de los derechos civiles, libertades públicas y esperanzas electorales antes conculcados.

Esa democracia, básicamente concebida para descomprimir el ambiente social, regular la rotación entre administraciones oligárquicas formalmente electas, así como restringir la participación de opciones contestatarias, fue

débil frente a la ofensiva neoconservadora y las tesis neoliberales que ésta implantó. Destinada a administrar políticamente el servicio de la deuda externa, aplicar las reformas recetadas por el Consenso de Washington y mantener bajo control sus previsibles efectos sociopolíticos, hoy todavía la llamamos “democracia neoliberal” por el contenido de la gestión económica que le tocó implementar. Por supuesto, las formas, modalidades, grados y calendarios con los cuales esta implantación se concretó en las diversas latitudes latinoamericanas fueron tan diferentes como los respectivos casos y procesos nacionales. Como así también han sido distintos sus correspondientes efectos y secuelas. No obstante, se pueden constatar dos observaciones:

1. La primera, que al no tener que vérselas con adversarios de mayor consideración, la ofensiva neoconservadora tuvo penetrantes y extendidas consecuencias ideológicas, no sólo entre las clases hegemónicas sino también entre las capas medias y la intelectualidad política, empresarial y académica. Ante los vacíos y obsolescencias ideológicas dejadas por la “caída del muro”, las tesis del Consenso de Washington penetraron como lugares comunes en el pensamiento cotidiano de las dirigencias latinoamericanas, incluso en el de algunas izquierdas a las que “jaló” hacia el centrismo político. En Europa occidental, por ejemplo, una parte de la socialdemocracia buscó conciliar su herencia socialista con las tesis neoliberales, lo que no resultó en “actualizarse” sino en extraviar su propia identidad y programa políticos. Grandes partidos socialistas europeos que por esa vía se deslizaron hacia el centro no sólo perdieron su identidad y razón de ser, sino también a millones de electores decepcionados, obsequiándole así una nueva oportunidad a las derechas. Sus imitadores latinoamericanos no corrieron mejor suerte.
2. La segunda, que tras una inicial estabilización macroeconómica, las políticas neoliberales ya no estabilizaron la situación, sino que pasaron a generar otras feroces consecuencias sociales. Aquí no es indispensable volver a describirlas, puesto que hay abundante literatura sobre el tema. Pero sí conviene recordar que esas consecuencias sociales afectaron negativamente la estructura y cohesión de la clase trabajadora, lo que enflaqueció sus organizaciones, puesto que muchos de sus integrantes se dispersaron

para sobrevivir en la informalidad o la emigración. Asimismo, proletarizó, cambió el perfil ocupacional y redujo la autonomía de distintas fracciones de las capas medias, mientras millones de fugitivos de la crisis rural siguieron migrando a las ciudades, pero ya no para engrosar la clase obrera sino los crecientes cinturones de miseria urbana. Todo ello aglomeró un nuevo personaje social, menos articulado y consciente de sí mismo pero no menos sufrido, al que Frey Betto denomina el “pobretariado”.

Con el tiempo, la prolongación de las frustraciones y disgustos sociales provocados por los efectos de las políticas neoliberales acumularía una masa de malestar e inconformidad que, en varios países, se combinaría con la flagrante carencia de nuevas propuestas y organizaciones políticas capaces de ofrecerles objetivos y canalización. A la postre, esa masa sin cabeza estratégica empezaría a insurreccionar ciudades —Caracas, el Alto, Quito, Buenos Aires, entre otras—, a secundar a sonadas y a defenestrar gobiernos sin disponer todavía de otra alternativa que instituir en su lugar.

Por si no bastara la constatación académica de que la doctrina neoliberal es una especulación ideológica plagada de errores teóricos, los efectos sociales de su aplicación —especialmente de las aplicaciones indiscriminadas, mecánicas y masivas auspiciadas por los organismos financieros internacionales— al cabo resultaron peligrosas para la estabilidad social y la gobernabilidad que interesan a sus mismos promotores. Sobre todo, cuando el “achicamiento” neoliberal del Estado lo priva de los poderes requeridos para subsanar problemas sociales, prever y corregir efectos malsanos, así como ejercer la conducción y control de sus propias poblaciones.

Así pues, a fin de cuentas la práctica de los postulados del Consenso de Washington, además de evidenciar su fracaso en la escasez de éxitos duraderos en la arena económica, no sólo provocó irritaciones sociales, sino el cuestionamiento de los sistemas políticos previamente establecidos. Es decir, puso en crisis al modelo de democracia restringida que había facilitado instrumentar su aplicación, pero que al cabo resultó incapaz de administrar las consecuencias de la puesta en práctica de dichos postulados.

Finalmente, tras una ilusoria y corta primera impresión, el neoliberalismo logró pegarse un tiro, no en el pie, sino en la mano de empuñar el revólver. Y ahora, bajo el impacto de la crisis económica mundial generada en las grandes instituciones financieras estadounidenses y europeas, hasta los ortodoxos más obsesivos aceptan que la desregulación y la consiguiente falta de supervisión y control del Estado indujeron y aceleraron esa catástrofe. Ahora, cuando los mercados del Norte siguen al borde del naufragio y millones de trabajadores (y de parásitos) norteamericanos y europeos han quedado al garete, reconocen los peligrosos efectos de



esa prédica, pese a que los latinoamericanos hace años los veníamos exhibiendo y denunciando. Y todos admiten, también, que el muro neoliberal se derrumbó.

Paradójicamente, aunque las izquierdas latinoamericanas —a través de la crítica sistemática de las tesis neoliberales y de sus efectos sociales— hace mucho advirtieron ese fracaso, no por ello dispusieron de lo necesario para proponer otra alternativa de pensamiento económico más acertada y viable. Como tampoco pudieron prever e identificar la naturaleza de la actual crisis económica mundial, y nuestras opciones frente a la misma, pese a tantos años de anunciar que ella sobrevendría. En una situación que recuerda la descrita por Antonio Gramsci —el pasado ya muere sin que todavía hayamos producido su sepulcero—, el fracaso neoliberal y el estallido de la crisis global han tenido lugar antes de que hubiéramos elaborado un sistema conceptual y operativo idóneo para remplazarlo.

Así las cosas, uno de los principales problemas a resolver en este aspecto puede formularse de una manera tan directa como sencilla: ¿de qué otro sistema conceptual podremos disponer, y cuándo, para manejar la crisis e impulsar nuestras propias alternativas de desarrollo —especialmente ahora que los grandes adversarios del cambio histórico están en problemas—, sin dañar la integración Sur-Sur ni retroceder a antiguos aislamientos proteccionistas?

La crisis del sistema político

Vistas las cosas en esa perspectiva, llama la atención el hecho de que la mayoría de los estudios disponibles acerca de las consecuencias del neoliberalismo y de sus incidencias entre los votantes en nuestros países, proviene de análisis de carácter económico y sociológico. Si bien les corresponden

muchos aciertos, todavía hace falta sopesar el aspecto específicamente *político* del fenómeno. Como recordábamos, las democracias restringidas ofrecieron un ámbito acotado donde ejercer cierta convivencia social, libertades públicas y derechos ciudadanos. La justificación económica de ese ámbito correspondió, en una u otra forma y grado, a los ilusorios efectos iniciales del “reajuste” neoliberal. Las más de las veces su uso implicó gobiernos civiles débiles y atormentados por el desastre económico legado por los regímenes oligárquico-militares —el servicio de la deuda externa incluido—, con los respectivos espectros de estancamiento, desempleo e hiperinflación, y el consiguiente apremio por obtener financiamiento externo.

Esos gobiernos nacieron en una trampa, cuyas precariedades y urgencias económicas y políticas fueron impiadosamente aprovechadas por los tecnócratas de las instituciones financieras internacionales y otros agentes financieros foráneos —ninguno de ellos democráticamente electo—, para hacerlos asumir los respectivos compromisos. Aplicar los “ajustes” no fue cuestión de si nuestros gobernantes eran o no neoliberales o estaban dispuestos a convertirse: esa no fue una opción voluntaria y quienes se resistieron no tendrían oportunidad de superar el embrollo. En el ámbito social y político así acotado, las democracias restringidas funcionaron como democracias de servicio a la deuda (externa) y gobiernos civiles de administración de la crisis (social). Esto hace imprescindible diferenciar “la democracia que deseábamos” de “la que nos dejaron tener”, a fin de destacar la necesidad de impulsar movilizaciones y usar los mecanismos disponibles para rehacer esa democracia “real” o realmente existente y lograr “la democracia que queremos”.¹

La democracia restringida, como cualquier otro régimen, demanda y genera un *sistema político* que le sea funcional. Más allá de la estructura político-electoral constituida por los partidos, normas, autoridades y calendarios que intervienen en la organización de comicios y participan directamente en su realización, el sistema político abarca al conjunto mayor e inclusivo de todos los agentes sociales, económicos, institucionales, culturales y políticos que interactúan para constituir el ambiente dentro del cual se forman y manejan las agendas temáticas, actitudes, corrientes de opinión y liderazgos que sustentan, moldean y le dan aceptación y previsibilidad a las conductas políticas de los principales sectores de la población. Este ambiente propicia, así, la aceptación, legitimación y acatamiento de ciertos parámetros y reglas del juego —escritas o no— dentro de las cuales los adversarios podrán actuar normalmente (en el sentido de que “normal”

Todo ello aglomeró un nuevo personaje social, menos articulado y consciente de sí mismo pero no menos sufrido, al que Frey Betto denominó el “pobretariado”

es aquello que se atiene a la norma vigente), e incluso relevarse entre sí. Lo cual debe conseguirse una y otra vez sin desestabilizar el funcionamiento y la continuidad (o re-producción) del conjunto de la totalidad cultural, social y económica que el sistema político debe cohesionar, administrar y representar.

Como es sabido, para configurar el ambiente social donde se consagran y acatan esas reglas del juego, y donde se moldean las agendas políticas y la conformidad de los comportamientos cívicos —en el sentido no sólo de torrear y consensuar actitudes y expectativas sociales, sino de desacreditar y marginar todo amago de inconformidad—, tiene especial relevancia el control y la penetración de los medios de comunicación. Estos siempre han tenido enorme influencia: desde el poder oscurantista del púlpito en la Edad Media, al de la imprenta en la difusión de las otras formas de pensar en la Reforma, y del periódico en las insurgencias de los siglos XIX e inicios del XX, hasta la irrupción de la radio y la actual hegemonía de la televisión. Hoy, los medios más poderosos funcionan como pilares de la dominación sociopolítica, incluso disputándole ese papel a los partidos políticos. Tras cada zancada del progreso en los instrumentos de comunicación masiva, las clases dominantes han procurado controlar y desarrollar a su manera los medios de mayor penetración, no sólo para propósitos mercantiles, sino también para alinearlos a favor de la consolidación y defensa de los lugares comunes del pensamiento y las conductas sociales que sus propietarios consideran más funcionales para reproducir el sistema político en el que ellos protegen sus intereses.

Esto no significa que los medios más poderosos sólo expresan el pensamiento y las preferencias privadas de la clase dominante. Significa, eso sí, que difunden los modos de pensar y los comportamientos que ella le imprime a la cultura política de los demás grupos integrantes de la sociedad. De la misma forma, la célebre frase “la cultura dominante es la cultura de la clase dominante” no significa que la burguesía se afana para que todo obrero piense como un burgués, sino que el burgués educa a su hijo para hacer de él un ejecutivo exitoso, pero al obrero para formarlo como un autómatas disciplinado y rentable. Como instrumentos culturales de la clase dominante, la prensa y publicidad participan activamente en la tarea de repartir los diferentes roles y valores culturales e informativos que mejor corresponden a la finalidad de preservar y perfeccionar su dominación, procurando que los demás grupos sociales asuman los comportamientos públicos, distintos pero complementarios, que mejor correspondan a la misma.

¹ Ver Nils Castro, “¿Es viable la socialdemocracia?”, en *Tareas* n. 73, Panamá, septiembre-diciembre 1989. También: “Comentario”, en *Secuencia* n. 18, Instituto Mora, México D.F., septiembre-octubre 1990; “Democracia y democratización real”, en *Estrategia* n. 107, México D.F., septiembre-octubre 1992; y “De la crisis de la ‘democracia’ a la democratización real”, en *Tareas* n. 83, Panamá, enero-abril de 1993.

Privatización y recuperación del sistema

En la democracia restringida, ya sea ésta neoliberal o postneoliberal², dicha acción contribuye al efecto de encarecimiento y virtual *privatización* de las actividades políticas, particularmente las electorales, así como a la exclusión de eventuales *outsiders* contestatarios. Para lograr implantarse, los partidos, candidaturas y propuestas progresistas se ven forzados a enfrentar campañas cada vez más costosas, que con frecuencia requieren contratar expertos extranjeros y empresas transnacionales de la publicidad. En muchos de nuestros países, el principal acreedor (y extorsionador) de los partidos y/o los candidatos son los consorcios que dominan la televisión. Los subsidios estatales destinados a mitigar esa situación, cuando los hay, suelen ser insuficientes, verse muy condicionados y estar sesgadamente distribuidos. Esto no es un problema para los grandes partidos conservadores, que disponen del respaldo de los poderes económicos dominantes: medios y partidos son, aquí, dos botones de la mancuerna que adorna el puño de la clase que maneja y retiene la batuta. Los contrincantes políticos burgueses se retan en las tribunas públicas pero comparten el café, junto con los intereses y acciones, en las juntas directivas de las mismas empresas.

Esto surte invariables efectos selectivos y excluyentes contra los movimientos sociales y partidos contestatarios, que se ven obligados a realizar esfuerzos desproporcionados para financiar sus actividades regulares y campañas electorales y desarrollar procedimientos originales y creativos para hacerle frente a semejante desigualdad de condiciones. Por consiguiente, como bien señala Gramsci, “en la lucha política es preciso no imitar los métodos de lucha de las clases dominantes, para no caer en fáciles emboscadas”³. Así como la guerrilla no vence al ejército tradicional copiando sus estructuras y medios, sino sorprendiéndolo con iniciativas imprevistas y obteniendo respaldo social —dos cosas que van bien de la mano—, las izquierdas necesariamente deben saber comunicarse, informar y educar desplegando formas e instrumentos inéditos.

Lo mismo corresponde decir respecto a los fines de dichas comunicaciones. Esa desproporción en la disponibilidad de recursos económicos y mediáticos para el quehacer político exige destacar otra cuestión de extrema y duradera importancia: la principal tarea de los movimientos y partidos que representan la inconformidad social y la lucha por impulsar un programa de cambios de fondo es la de *producir y masificar una contracultura política* que se oponga a la cultura implantada por el sistema existente. Una contracultura de los sectores populares que ayude a

² La crisis y revisión (o replazo) del neoliberalismo no implica que el modelo de democracia “que nos han dado” o permitido deje de ser el modelo restringido, al menos hasta que nuestra acción política lo reforme y reemplace.

³ Antonio Gramsci, “Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno”, en *El príncipe moderno*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003, p. 78.



desarrollar la necesaria independencia crítica frente a las influencias de los grandes medios de comunicación y los demás instrumentos ideológicos de la clase dominante. Y que le facilite a las organizaciones populares identificar y anteponer sus propios valores y objetivos, a darse una agenda propia con la cual establecer sus prioridades y cursos de acción, y a ganar mayor adhesión y respaldo sociales. La misión medular de esa contracultura no es contestar a cada lance de la agenda burguesa, sino adelantarse en entronizar los temas que interesan al movimiento popular.

Sólo la expansión y arraigo de esa contracultura puede darle sustentación social a las campañas y hacerlas más eficaces, a través de la adhesión consciente de los sectores populares y medios. El éxito electoral de los movimientos y partidos contestatarios no puede depender de sus escasos recursos publicitarios y comunicativos, terreno donde sus oponentes operan ventajosamente. Sobre todo, si obtener financiamientos de campaña conlleva pactar compromisos políticos con los donantes de esos recursos, lo que no pocas veces implica mediatizar y hasta derechizar el discurso y las propuestas de campaña, esto es, diluir tanto la identidad de los movimientos y partidos como la mística de sus seguidores, y abrirle opciones al oportunismo.

No hay mal que dure cien años...⁴

Aun cuando en el marco “normal” de la democracia neoliberal las izquierdas debieron encarar tales limitaciones y desventajas, al cabo de los años el malestar y la disconformidad acumulados sobrepusieron al sistema establecido, cuestionándolo, desacreditándolo y generando repudios y desacatos. La incapacidad de las prácticas políticas tradicionales y de los partidos instalados en el sistema —algunos de izquierda incluidos— para resolver las causas del malestar social y ofrecer soluciones alternas, los llevó, finalmente, a compartir ese descrédito y perder la confianza pública. En los tiempos y formas propios de cada

⁴ “No hay mal que dure cien años ni pueblo que se lo aguante”, frase del discurso del general Omar Torrijos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido en Panamá en 1973 para discutir el reclamo panameño de terminar el enclave colonial estadounidense de la Zona del Canal.



realidad nacional, luego de agotar las opciones político-electorales disponibles, la mayoría de los votantes pasó del escepticismo y la abstención al voto de castigo y a la *antipolítica* en general, como forma más emotiva que racional de repudio a los partidos y los políticos, descalificándolos en bloque como cúpulas indiferentes a la suerte de la población. Por diversos caminos, las explosiones sociales y sus posteriores efectos políticos terminaron por dar oportunidad a la elección de los gobiernos progresistas de los últimos años.

No es cuestión de repetir aquí el relato histórico de esos procesos, ya conocidos. Lo que sí cabe es observar que ese fenómeno se ha realizado a lo largo de dos rutas, que no siempre se excluyen entre sí y que a veces se han sucedido consecutivamente. La primera fue esa que llevó a reiterados levantamientos urbanos, capaces de tumbar gobiernos pero carentes de las propuestas y la organización necesarias para instaurar nuevos regímenes. La otra, la que condujo a la mayoría de los votantes a secundar una opción electoral contestataria del sistema político vigente.

En el primer caso, los partidos y dirigencias políticas tradicionales ya no estaban en condiciones de sortear el descontento. El desgaste del sistema político lo colapsaba por sí solo. La rebelión urbana desconoció, desacralizó e inutilizó al sistema vigente y defenestró gobiernos o los dejó en situación precaria. Luego, según las singularidades y vicisitudes propias de cada proceso nacional, lo que restaba de la vieja institucionalidad apenas serviría para organizar un proceso electoral atípico que permitiera cederle el mando presidencial a un candidato crítico del viejo sistema, es decir, un contracandidato u *outsider*, para así eludir el riesgo de perder todo lo demás.

Es por eso que la primera variante ha podido viabilizar soluciones más radicales, como en los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, aunque con mayores resistencias y dificultades en este último país debido a las complejidades y contrastes regionales, ideológicos y etnoculturales involucrados. Por su parte, pese a la fortaleza de la rebelión urbana bonaerense, la difícil definición de un nuevo liderazgo que pueda orientar el cambio, el contrapeso político de un poderoso conservadurismo rural, junto a los obsecados vetos de unas izquierdas a las otras, terminaron

por reducir la opción argentina a una variedad del segundo tipo, moderando sus alcances.⁵

Es un hecho, sin embargo, que ninguno de esos casos ha dado lugar a una revolución en el sentido clásico del término, y todos en cambio han confirmado que no es lo mismo llegar al gobierno que tomar el poder. Ninguno, en efecto, involucró la toma de la totalidad del poder del Estado por una fuerza capaz de fundar una nueva formación histórica en remplazo del capitalismo: todos se resolvieron en cambios de gobierno institucionalmente obtenidos y reconocidos por medios electorales, más o menos en el marco de las restricciones características del sistema político preexistente.

Así, por ejemplo —dentro de las respectivas particularidades—, salvo el caso de los grandes colapsos sistémicos de Venezuela y Ecuador, la mayor parte de esos nuevos presidentes progresistas asumió la dirección del Órgano Ejecutivo sin disponer de la mayoría parlamentaria requerida para poder ir más allá de cierto género de innovaciones, ni disponer de influencia sobre el Órgano Judicial, o sobre otros poderes reales como las fuerzas armadas, las instituciones financieras o los medios de comunicación, como tampoco del gobierno de los estados o provincias federales. A esto se añade que, pese al colapso ideológico del neoliberalismo y el descrédito del reordenamiento estructural que éste hizo implantar, las reformas neoliberales han quedado como un *hecho cumplido*, difícil de remover: quíerese o no, las privatizaciones están hechas, las reglas macroeconómicas y financieras implantadas permanecen vigentes, hay compromisos de seguridad jurídica que seguir acatando, y esas realidades no son fáciles de remover.

Por añadidura, los nuevos gobiernos progresistas, electos gracias a las consecuencias políticas de las descalabradas secuelas del régimen anterior, se estrenaron constreñidos a priorizar la lucha contra la inflación y/o a salvar el valor de la moneda y/o a recuperar el crédito y/o a mantener la dolarización, etc., para evitar que dichas secuelas colapsaran a un Estado que ya iba rumbo a la inviabilidad. Se vieron así constreñidos a rescatar la salud del capitalismo local para impedir un agravamiento de la situación heredada y disponer de recursos con los cuales emprender proyectos de interés social.

Un ámbito de liberación nacional

En esas circunstancias, más que iniciar un proceso revolucionario, los nuevos gobiernos progresistas han coincidido en tres grandes avenidas en las que, pese a todo,

⁵ Estos procesos han establecido la preeminencia política del ámbito urbano policlasista, diferenciándose tanto del viejo Estado liberal oligárquico, de resonancias provincianas, como del Estado neoliberal (a su modo también neo-oligárquico) de impronta elitista y transnacional, ahora en crisis. Esta nueva realidad política recuerda en cierto grado al Estado liberal desarrollista de las décadas de los 50 a los 70 del siglo pasado y los populismos reformistas que lo sustentaron, antepuerta de las dictaduras que los siguieron.

han obtenido notables éxitos. En lo social, avanzaron en el combate a la pobreza, la exclusión, el hambre y el desempleo y, en la medida de lo factible, en mejorar la distribución del ingreso. En lo político, avanzaron en el rescate de soberanía y recuperaron importantes cuotas de autodeterminación, avanzando en el empeño de hacer de América Latina una comunidad de naciones con mayor iniciativa frente a la tradicional hegemonía norteamericana. Por otra parte, en el plano integracionista, han impulsado los procesos de integración Sur-Sur en la región y, en algún caso, hasta más allá del continente.

Aun así, pese a lo mucho que todo eso vale en el ámbito de un proceso de *liberación nacional* —como antes lo llamábamos—, ello no configura una situación revolucionaria, sino una donde las cosas se pueden hacer mejor desde el punto de vista social y humanitario, y donde se vuelve más factible reactualizar y ampliar las condiciones “subjetivas” y organizativas necesarias para que de aquí en adelante las izquierdas puedan madurar aspiraciones de mayor aliento revolucionario, en vez de quedarse en cuestionar o defender los progresos ya obtenidos. Especialmente, en circunstancias en las que la hegemonía imperialista ha perdido poder de intervención.

En realidad, lo que hasta ahora tenemos son los resultados del malestar social que antes deslegitimó al sistema político existente, el de la democracia restringida y neoliberal, y lo puso en crisis. Una crisis política multiforme que desembocó en un crecimiento de la disposición popular para apoyar candidatos y propuestas antisistémicas, pero que aún no alcanza a completar —no podía por sí sola lograrlo— las condiciones clásicas de una situación revolucionaria. Al respecto, no cabe menos que preguntarse: ¿estaban (o están) estos pueblos latinoamericanos en condiciones y en actitud de materializar y defender desarrollos revolucionarios de mayor alcance y riesgo? O, en su lugar, ¿qué más falta para que eso pueda darse, a quién corresponde hacerlo y, finalmente, en qué medida estos gobiernos progresistas podrán contribuir a adelantar ese camino? En el lenguaje de los albores de la III Internacional, ¿ahora qué hace falta para que tales procesos de liberación puedan dar pie a procesos revolucionarios?

La brecha por llenar

Las respuestas tendrán diferencias de país a país, pero en todos aún gravita un rezago en el campo de las ideas y las expectativas colectivas, y en el de la disposición de romper los actuales patrones de vida y arriesgarse por ellas. Las causas mayores de este déficit vienen de problemas suscitados en el desarrollo del componente subjetivo de las posibles situaciones revolucionarias, y las consecuencias organizativas que eso conlleva. Como bien sabemos, después de cierto apogeo de las ideas y motivaciones revolucionarias en los años 60 y 70 del siglo pasado, un conjunto de acontecimientos cuestionó y erosionó sus propuestas doctrinarias, certidumbres y expectativas. Pese a

Es preciso valorar los proyectos como movimientos culturales, en este caso, como movimientos de reconstrucción de la cultura y la práctica políticas, en las cuales incorporar las nuevas demandas y darles orientación eficaz

los años transcurridos, aún no hemos repuesto gran parte de los platos rotos (más nos hemos ocupado de buscar quién debía pagar por ellos que en reponer la vajilla).

No fueron pocas las variantes frustradas. Entre ellas, la desestabilización y violenta liquidación del intento democrático de Salvador Allende; el deterioro y desaparición de las opciones del nacionalismo revolucionario liderado por algunos militares⁶; y la derrota o desmovilización negociada de las experiencias guerrilleras. Adicionalmente, la reformulación de la estrategia abanderada por China y la liquidación del maoísmo, el deterioro y colapso del ejemplo soviético —que para muchos aún conservaba valor paradigmático—, así como la aspereza sectaria en el manejo de la diversidad entre las corrientes de izquierda y, por añadidura, la dureza del “período especial” cubano que indujo a mantener la solidaridad con la Isla pero también a desistir del modelo que ella había representado. Y, arrojada como una avalancha sobre esos telones de fondo, la potencia y penetración de la ofensiva neoconservadora desatada a partir de los tiempos de la señora Thatcher y la administración Reagan.

El derrumbe del modelo soviético podía propiciar efectos liberadores, al desembarazar las capacidades creativas del marxismo y el socialismo, justamente cuando los pueblos latinoamericanos, más sometidos, explotados y empobrecidos que en tiempos del Ché en Bolivia, requerían otras propuestas liberadoras. Cuestión de tiempos ideológicos y culturales. Lamentablemente, antes de que eso pudiera darse, dicho conjunto de factores acarrió el cuestionamiento de no pocas confianzas y convicciones, con un largo saldo de decepciones, incertidumbres, oportunismos y desmovilizaciones.⁷

Aún así, luego de dos lustros de sufrir la puesta en práctica de los postulados del llamado Consenso de Washington, gran parte de nuestros pueblos estuvo lista para rechazar, tanto los “ajustes” neoliberales como a sus promotores, aunque ese repudio todavía careció de un conjunto de propuestas sistematizadas que diera sentido y propósito efectivamente transformador a esa disconformidad. A

⁶ Juan Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia y Omar Torrijos en Panamá.
⁷ En la confusión provocada por el cruce de ese conjunto de frustraciones con la ofensiva neoliberal, una de las consecuencias fue el deterioro de la capacidad de producción teórica de las izquierdas. Tras el derrumbe del populismo desarrollista, bajo la ofensiva neoconservadora, ese deterioro propició la tendencia a sustituir el análisis crítico del sistema, el de su carácter capitalista, por la mera denuncia de sus consecuencias. Con ello, a la postre una porción de la izquierda ha vuelto a las posiciones del desarrollismo de los años 70 y la opción del capitalismo de Estado, al que ahora algunos presentan como un supuesto “socialismo” del siglo XXI.

diferencia de los años 60 y 70, en ausencia de la necesaria contracultura política, gran parte de las demandas se dirigió más a reclamar la derogación de tales “ajustes” que a cuestionar al capitalismo como tal.⁸

En esa carencia también intervinieron factores objetivos. Las reestructuraciones implantadas durante la hegemonía neoliberal dispersaron una valiosa parte de los trabajadores —eliminados sus puestos de trabajo, se dispersaron en busca de sobrevivencia en la informalidad y la emigración—, que pasaron a engrosar el “pobretariado”. A su vez, las capas medias perdieron autonomía y se debilitaron en número, mientras parte de la intelectualidad fue arrollada por las nuevas dudas y descalificaciones ideológicas. No puede soslayarse el hecho de que, en parte por la carencia de una contracultura propia, significativos contingentes de pobres y desplazados de las ciudades y el campo entraron a las clientelas de los líderes políticos de la clase dominante, unas veces por un mendrugo y otras seducidas por un poco más que eso. Hoy, en varios países latinoamericanos también la derecha dispone de contingentes populares motivados y organizados, además de los tradicionales “escuadrones” de acción extrajudicial.

Revertir ese estado de cosas en el campo ideológico y cultural no podía ser fácil ni rápido. En particular, bajo el esfuerzo sistemático del régimen neoliberal por promover la formación de una “sociedad civil organizada” a la medida de su necesidad de legitimarse y, a la vez, de continuar por medios civiles la tarea de desbandar tanto a las dirigencias populares como a los centros de estudios y publicaciones que la intelectualidad de izquierda tuvo entre los años 60 y 80, y que en su tiempo contribuyeron a capacitar los movimientos populares de su época. Revertir la situación exige recrear conciencia y solidaridad de clase, esto es, contribuir a que grandes masas recuperen destreza crítica y autonomía política, y a que sus núcleos más conscientes puedan renovar sus agendas temáticas y propuestas, remozar lenguajes y estilos, reformular objetivos y métodos de actuación popular, en las circunstancias —es decir, las limitaciones y las oportunidades— de cada realidad nacional. Lo que, asimismo, requiere trabajo intelectual orientado a elaborar otra visión del interés colectivo, para mejorar la cooperación de los distintos segmentos populares.

Las derechas y sus clientelas pueden permitirse el lujo de ofrecer más de lo mismo empaquetándolo con nuevos formatos y recursos mediáticos, incluso simulando actitudes antisistémicas y vistosos “cambios” que apenas son de estilo. Pero las izquierdas no. Y menos cuando el sistema político

⁸ Todavía ahora, bajo el impacto de la crisis económica global, son más las voces que piden medidas anticíclicas con sensibilidad social —defensa del empleo y el salario— que no castiguen a los ahorristas sino a los banqueros, que las que cuestionan al sistema como tal. Sintomáticamente, lo que se demanda es un *adecentamiento* del capitalismo, no su remplazo, lo que es revelador de esa inoportuna ausencia de una propuesta alterna renovada y sostenible.

está en crisis y sus ofertas no son confiables y, peor aún, cuando estamos ante una gran crisis económica mundial que desmiente al neoliberalismo y agrava todas sus secuelas.

Protagonistas en la tarea

Requerimos, pues, reconvertir un difuso descontento social en una cultura nueva, capaz de expresarse en una práctica política a la vez renovada e *innovadora*. Avanzar en esa ruta es indispensable para *hacer de la izquierda el agente de organización capaz de catalizar la cultura nueva* que espontáneamente tiende a emerger de nuestras luchas sociales, pero que no podrá sistematizarse sin la necesaria intervención de las organizaciones políticas a quienes les corresponde promover ese surgimiento. Los partidos y movimientos organizados son entidades vivas que, en interacción con los demás actores del sistema político, pueden encallar en las concepciones de una época o adelantarse a impulsar nuevas opciones. Se pueden anquilosar o relanzar, según dónde, cómo y para qué entierren sus raíces en unos u otros campos sociales y oportunidades históricas, donde ellos así podrán perder o recuperar autenticidad.⁹

Obviamente, las demandas y expectativas sociales cambian, y lo hacen con una dinámica propia, con sus respectivas variables. Y dentro de esa dinámica a los partidos les corresponde desempeñar determinados papeles en la medida en que surgen y evolucionan en función de cumplir cierto proyecto. Aún así, con el tiempo cualquier partido —a semejanza de las otras formas de organización social— tiende a potenciar las conductas internas encaminadas a preservar sus propias estructuras y mandos, a reproducirse a sí mismos, en vez de readecuarse para impulsar nuevas formas de cambiar la realidad. Pueden así perder el piso social que originalmente los sustentaba.

Es característico de todo sistema que, tan pronto como una estructura deja de hacer lo que le corresponde, empiezan a generarse comportamientos que soslayan los patrones preestablecidos, comportamientos que la teoría de sistemas llama “informales”. Por ejemplo, cuando la economía formal deja de cumplir sus responsabilidades sociales, crece el campo de la economía informal. Asimismo, en la medida en que los partidos y los procedimientos políticos constituidos ya no hacen lo que deben, aparecen enseguida otras agrupaciones que procuran cumplirlo por distintos medios. Es decir, las nuevas necesidades y expectativas sociales buscan otras vías de solución si los partidos ya no las resuelven. Así las cosas, la proliferación de organizaciones de la llamada “sociedad civil” (y la euforia de sus pretensiones) puede ser parte de esa *informalización* de la política.

⁹ Ver Nils Castro, “Crisis y reconstrucción de los partidos”, en *Reflexiones en un Panamá democrático*, Tribunal Electoral, Panamá, 2006.

A veces, las organizaciones civiles más bulliciosas son grupos muy elitistas que apenas representan cierto segmento de la clase media acomodada, pero se arrojan la representación de toda la sociedad. Pueden ser doce o catorce gatos, pero muy vistosos. No hay que confundirlos con las organizaciones que a un partido realmente le deben importar: las organizaciones comunitarias, barriales, laborales, las organizaciones representativas de grandes segmentos y reivindicaciones sociales. En todo caso, los partidos, como cualquier otro tipo de organización —sean asociaciones cívicas, gremiales o culturales, empresas, clubes deportivos o iglesias—, periódicamente necesitan renovar su representatividad, en la medida en que la propia sociedad y sus expectativas van modificándose. Necesitan renovar objetivos en la medida en que éstos se cumplen —cuando uno avanza en sus objetivos o fracasa en cumplirlos, la realidad deja de ser la misma—, lo que obliga a reconocer las nuevas demandas y a responderles con nuevas propuestas. Esto es, reconfirmar la vida de cada partido demanda renovar su vigencia, porque los proyectos se agotan y con ello las organizaciones que son sus portadores. Cuando ya no hay proyecto creíble y movilizador el partido pierde legitimidad. Es preciso valorar los proyectos como movimientos culturales, en este caso, como movimientos de reconstrucción de la cultura y la práctica políticas, en las cuales incorporar las nuevas demandas y darles orientación eficaz.

¿Reforma o revolución?

Al fin y al cabo, se milita en un partido de izquierda porque se está insatisfecho con la realidad en la que se vive. Tenemos realidades odiosas, discriminadoras, plagadas de pobreza, miseria y exclusiones. Se milita porque se las quiere cambiar. Por lo tanto, se necesita un proyecto de cambio relevante, persuasivo y factible. En contraste, cualquier tipo de claudicación, conformarse con más de lo mismo, igualmente traerá resultados desalentadores y disgregantes. ¿Reforma o revolución? Mientras no dispongamos de propuestas que faciliten desarrollar la necesaria contracultura política y darle efectiva sustentación de masas a una renovada ofensiva revolucionaria, es irresponsable demandar que los actuales gobiernos progresistas asuman ese papel. Ellos no son producto de una situación revolucionaria, puesto que el componente “subjetivo” de esa situación no se ha dado o mejor dicho, aún no lo hemos construido. Son efecto de una crisis del sistema político-electoral, no del sistema general de dominación.

Nuestros gobiernos progresistas pueden y deben contribuir al necesario proceso de formación de conciencia, de expansión y fortalecimiento de la contracultura popular, de

organización de los sectores sociales populares y los interesados en cambiar más profundamente la situación y sus perspectivas. Pero no pueden hacer más de lo que pueden las alianzas que los hicieron factibles, ni más de lo que el sistema en su conjunto puede sobrellevar. Por otra parte, la crisis política que hizo posible elegir estos gobiernos no es irreversible. La esperanza de que nuestros pueblos, sin haber desarrollado todavía esa contracultura, seguirán votando por ofertas electorales de uno u otro matiz de las izquierdas, puede ser más o menos temporal. Muchos de ellos no necesariamente han votado por un proyecto de izquierda, sino que con su voto han castigado a quienes ven como los causantes de su actual descontento. Al cabo de unos pocos años, ¿quiénes serán vistos como los responsables de sus próximas insatisfacciones? Antes de contestar, no debe olvidarse que ni la clase dominante, ni sus medios de comunicación, ni los sectores más reaccionarios del imperialismo están maniatados ni desprovistos de recursos, ni renunciarán a la arena política. No se enconchan a lamerse la herida sino a articular sus contraofensivas.¹⁰

Precisamente por la señalada flaqueza del factor subjetivo, la continuidad de lo que hoy tenemos no está ni mucho menos asegurada. País por país, los grandes medios de comunicación siguen cumpliendo su papel, muchas veces como Estado Mayor de los partidos tradicionales. Además, también la derecha puede crear y recrear vistosos figurantes antisistémicos por la forma, pero continuistas en su función, incluso más reaccionarios y menos respetuosos de la institucionalidad legal, como los Fujimori o Berlusconi. Entonces, la cuestión no es afligirnos acerca de si ahora tenemos o no gobiernos revolucionarios o si ellos deberían realizar un papel que sus críticos de izquierda tampoco han sabido cumplir. Como en su momento bien señaló Rosa Luxemburgo, “la reforma social y la revolución no son [...] diversos métodos del progreso histórico que a placer podamos elegir en la despena de la Historia, sino momentos distintos del desenvolvimiento de la sociedad de clases”.¹¹

La formación de momentos más propicios es y será obra humana. Dado que sus condiciones subjetivas aún no se han forjado, compete completarlas con las nuevas propuestas que este tiempo reclama, y sistematizar los trabajos que permitan masificar la cultura política que coloque esa opción en “la despena de la historia” y la pueda hacer sostenible. En el interin, no estará de más esforzarse para que nuestros actuales gobiernos progresistas resistan la prueba, y que su oportunidad no se frustre antes de cumplir sus mejores objetivos. Porque la posibilidad opuesta vendría a arrojarnos muchos años atrás. ☒

¹⁰ Las que, como ya se ha visto, no necesariamente respetan las normas ni principios democráticos.

¹¹ Rosa Luxemburgo, *Reforma social o revolución y otros escritos contra los revisionistas*, Fontanara, México D.F., 1989, pp. 118-119.

Nils Castro. Catedrático, ensayista y diplomático panameño. Fue asesor del general Omar Torrijos y de algunos presidentes y cancilleres de su país. Es autor de estudios sobre ideología y cultura en América Latina, y en los últimos años se ha dedicado principalmente al análisis de la coyuntura política en los países del Hemisferio. Fue Embajador de Panamá en México.